

C

Columna



Cristian Rodríguez

Director Instituto de Políticas Públicas UCN

Octubre

A cinco años del estallido social en Chile, el panorama es significativamente diferente al que muchos anticiparon en ese momento. Las demandas no solo no se han canalizado, sino que la ciudadanía ha desarrollado una visión más crítica y, en algunos casos, desilusionada hacia aquel proceso y sus resultados.

Uno de los aspectos más indiscutibles del estallido fue su capacidad para poner en el centro de la agenda pública problemas que habían sido ignorados por décadas. La desigualdad estructural, la precarización de los servicios básicos como salud, educación y pensiones, y la percepción de injusticia fueron temas que cobraron relevancia. Según el estudio realizado en 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 53% de las personas encuestadas manifestó su desagrado con la desigualdad de los ingresos. Sin embargo, el descontento era aún mayor cuando se preguntó por la desigualdad de acceso a la salud (68%) y la educación (67%), la población vivía con la sensación de que el país no les ofrecía oportunidades suficientes para progresar.

A pesar de la magnitud del movimiento, las expectativas de transformación se fueron diluyendo con el tiempo. Uno de los principales fracasos del estallido fue la incapacidad de convertir ese malestar en una agenda política coherente y de largo plazo. Las demandas eran múltiples y muchas veces contradictorias. El proceso constitucional, que se presentó como la principal res-

puesta institucional a las demandas del estallido, terminaron siendo un reflejo de esta fragmentación.

La violencia que acompañó a algunas de las protestas también contribuyó al fracaso del proceso. Lo que comenzó como una movilización pacífica y apoyada por una gran parte de la población, fue perdiendo legitimidad a medida que los episodios de destrucción de infraestructura y enfrentamientos se hicieron más frecuentes. Según el Estudio Nacional de Opinión Pública realizado por el Centro de Estudios Públicos, el apoyo a las protestas cayó del 55% en 2019 al 23% en 2024, mostrando un claro cambio en la percepción pública.

A cinco años del estallido social, es difícil hablar de un éxito transformador. Si bien permitió visibilizar problemas profundos en la estructura política, social y económica del país, los cambios concretos han sido limitados. Las expectativas de una nueva constitución que resolviera las demandas sociales se han desvanecido, el rechazo de los procesos constituyentes evidenciaron la desconexión entre la clase política y la ciudadanía. En retrospectiva, el estallido social puede haber sido un punto de inflexión, pero el camino hacia una verdadera transformación será el resultado de un proceso político largo y gradual, en el que las demandas ciudadanas deberán ser canalizadas a través de instituciones fuertes y acuerdos políticos amplios.